



DOCUMENTO INFORMATIVO 16/2010

ACTORES ARMADOS NO ESTATALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO AFGANO

(OCTUBRE 2010)

Según el índice de estados fallidos, publicado por la revista Foreign Policy en su número de Agosto-Septiembre 2010, Afganistán ocupa el sexto puesto entre los países más frágiles del mundo. Este dato viene a señalar la extrema debilidad de los mecanismos estatales de los que dispone el Gobierno de aquel país. Obviamente esta situación se complica aún más con la acción violenta de los Talibán, cada vez más activos. Todo ello pone en riesgo los esfuerzos internacionales para hacer de Afganistán un Estado viable.

Después del cambio de rumbo adoptado el pasado año en la estrategia en el conflicto afgano, las organizaciones internacionales presentes en la zona se centran ahora en las denominadas labores de “State Building” (construcción del Estado). En particular, los Aliados están tratando de cimentar unas fuerzas armadas y policiales que sean capaces de asumir progresivamente las labores de seguridad de su propio país. En estas circunstancias, las noticias provenientes de Afganistán no parecen ser muy prometedoras a la hora de facilitar esta labor.

En los últimos años, la presencia de Empresas de Seguridad Privada¹ (ESP) en escenarios de conflicto armado, similares a los que vive el actual Afganistán, ha sido criticada como una contradicción y una dificultad añadida al desarrollo de instituciones fuertes y democráticas, ya que socava la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y estabilidad de su territorio. Esta capacidad ha constituido desde hace siglos el signo identificativo del modelo actual de Estado-Nación.

Según algunas fuentes, las diferentes agencias gubernamentales estadounidenses tendrían contratados en Afganistán alrededor de 26.000 guardias armados para llevar a cabo labores de seguridad. En el conjunto del país, el número total se aproximaría a

1 Algunas fuentes prefieren utilizar el término “Empresas Militares y de Seguridad Privada” (EMSP) para referirse a este tipo de firmas. Pero el uso en este caso del término “militar” atrae frecuentes críticas, por estar ligado a los Ejércitos regulares. Así los organismos oficiales de los EEUU, en sus informes, utilizan el término “contratista” de forma general, descartando el de “militar”, para referirse al conjunto del personal civil que puede proporcionar algunos de los siguientes siete servicios: apoyo a bases y acuartelamientos, seguridad, construcción, traductores e intérpretes, transporte, comunicaciones y otros. Las empresas que proporcionan el citado servicio de seguridad, con o sin armas, son denominadas Empresas de Seguridad Privadas (ESP).

los 70.000. La ISAF confía en contratistas privados para custodiar bases y líneas de abastecimiento. También, muchas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales utilizan las firmas de seguridad privadas en labores de protección debido a que pocos consideran que la policía y al ejército afgano tengan la capacidad suficiente para llevar a cabo ese cometido, al menos por el momento.

En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos casos de conductas abusivas e incluso criminales por parte de contratistas armados, llegando a afirmarse que esta contratación debilita los esfuerzos internacionales y refuerza las posiciones de los insurgentes.

En junio pasado una investigación del Congreso estadounidense concluía que los transportistas que abastecían a las fuerzas de los EEUU pagaban millones de dólares a señores de la guerra locales, vinculados con los Talibán, para la protección de los convoyes. Casi al mismo tiempo, se tuvo conocimiento de que una buena suma de dólares, destinada inicialmente a un proyecto de desarrollo en la ciudad de Jalalabad, había acabado en manos de la insurgencia. La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional tenía encargada la seguridad de ese proyecto a una firma local, compuesta en la realidad por miembros pertenecientes a un grupo talibán, que habría recibido más de cinco millones de dólares en pago por sus servicios.

Con este tipo de antecedentes, no han constituido ninguna sorpresa los resultados expuestos en un informe del Senado de EEUU fechado el 28 de septiembre pasado, pero desclasificado algunos días después. El informe enumera 12 conclusiones entre las que pueden destacarse que las ESP contratadas por el Departamento de Defensa erraron en investigar apropiadamente al personal de esas empresas, proporcionar el entrenamiento adecuado y subsanar las deficiencias de los contratos de manera eficaz. El informe también señala que los EEUU están ayudando inintencionadamente a los talibán y pueden poner en peligro a tropas occidentales, al confiar su seguridad a agentes privados, mal supervisados y con frecuencia ligados a señores de la guerra. Asimismo, los senadores norteamericanos consideran que este recurso a firmas privadas, que es inconsistente con la actual estrategia contra-insurgente, afectará negativamente a largo plazo a la seguridad y estabilidad de Afganistán.

El documento del Senado estadounidense advierte, sin embargo, que eliminar esta práctica de emplear personal local podría empeorar la seguridad de las fuerzas aliadas. No obstante, se recomienda reducir el número de guardias armados privados y mejorar los procesos de selección, si se quiere revertir una tendencia que daña la misión internacional en Afganistán.

Hay que recordar que este tipo de inquietudes ha empujado al Presidente afgano Hamid Karzai a emitir un decreto por el que todas las ESP, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el país asiático deben finalizar sus actividades antes de que finalice el año 2010. En esta idea, el domingo 3 de octubre Karzai ha iniciado el proceso de disolución de las ESP presentes en el país, al ordenar que ocho de ellas, incluida Xe

Services (antes conocida como Blackwater) finalicen sus actividades de forma inmediata.

Pero esta presencia de ESP no es la única dificultad para la construcción de instituciones sólidas en Afganistán. Al mismo tiempo que se hacen públicas estas alarmantes informaciones sobre contratistas armados, el gobierno afgano ha anunciado la creación de milicias locales para luchar contra la insurgencia. Siguiendo el modelo utilizado aparentemente con éxito por el General Petraeus en Irak, se trataría de instruir fuerzas auxiliares afganas, basadas en una etnia, clan o grupo poblacional dado. Este programa, apoyado por los militares de los EEUU ya está en marcha en las provincias de Wardak y Uruzgan, bastiones de la insurgencia talibán. La intención es que con el tiempo, esta fuerza auxiliar alcance los 10.000 efectivos.

No obstante, esta iniciativa también puede dificultar los esfuerzos de constituir unas fuerzas armadas nacionales eficaces. Milicias comandadas por señores de la guerra combatieron unas contra otras durante la devastadora guerra civil de los años 90 que causó la muerte de cientos de miles de civiles afganos y la destrucción material del país. Por dicha causa, la decisión de Karzai de promover este tipo de fuerzas podría ser observada con cierta desconfianza por los propios afganos. Está por ver cuál será el control efectivo que sobre ellas ejercerá el Gobierno o si sólo constituirán, una vez más, una fuerza armada en manos de algún “empresario de la guerra”.

En conclusión, en un teatro de operaciones como el actual de Afganistán, en el que conseguir el apoyo de la población local es indispensable para el éxito de la misión y en el que se está tratando de construir algo similar a unas instituciones estatales estables, el comportamiento indebido tanto de contratistas como de milicianos armados afecta a la percepción que los afganos tienen de su gobierno, que acumula ya un importante descrédito y un acusado déficit de legitimidad.

*Madrid, 18 de octubre de 2010
Mario A. Laborie Iglesias
Teniente Coronel de Artillería
Analista Principal IEEE*